
Sentencia impugnada:	Corte de Apelación de Puerto Plata, del 1 de noviembre de 2018.
Materia:	Penal.
Recurrentes:	Pablo T. Brugal, S. R. L. y compartes.

Díos, Patria y Libertad

República Dominicana

En nombre de la República, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, regularmente constituida por los jueces Francisco Antonio Jerez Mena, presidente; María G. Garabito Ramírez y Vanessa E. Acosta Peralta, asistidos del secretario general, en la Sala donde celebra sus audiencias, en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, hoy 28 de diciembre de 2020, año 177° de la Independencia y 158° de la Restauración, dicta en audiencia pública virtual, como Corte de Casación, la siguiente sentencia:

I. Antecedentes. Descripción de la sentencia recurrida. Exposición Sumaria. Puntos de hecho.

- 1.1. La Segunda Sala ha sido apoderada de los recursos de casación interpuestos por: a) la razón social Pablo T. Brugal, S. R. L., debidamente representada por su socio gerente Pablo Tomás Brugal Guerra, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 037, 0021823-7, domiciliado y residente en la ciudad de San Felipe de Puerto Plata, tercero civilmente demandado; b) Gilberto García Álvarez y Ana Karina Rodríguez Cabrera, dominicanos, mayores de edad, portadores de las cédulas de identidad y electoral núm. 121-0010777-5 y 040-0012571-8, domiciliados y residentes en la ciudad de Luperón, provincia Puerto Plata, actores civiles; c) Omar David Sánchez Pichardo, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral núm. 037-0073962-4, domiciliado y residente en la ciudad de Puerto Plata, imputado; Pablo T. Brugal S. R. L., de generales ya anotadas; y la compañía Seguros Maphre BHD, contra la sentencia núm. 627-2018-SS-00356, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el 1 de noviembre de 2018, cuyo dispositivo se expresa de la manera siguiente:

Primero: En cuanto al fondo rechaza los recursos de apelación interpuestos por Pablo T. Brugal SRL; Omar David Sánchez Pichardo, Pablo T. Brugal SRL y Mapfre BHD, Seguros, por los motivos expuestos en la presente sentencia; **Segundo:** Acoge parcialmente el recurso de apelación interpuesto por, Gilberto García Álvarez y Ana Karina Rodríguez Cabrera, víctimas, querellantes y actores civiles, contra la sentencia núm. 279-2018-SS-0010, de fecha 22 de Febrero de 2018, dictada por el Juzgado de Paz del Municipio de Luperón, Provincia de Puerto Plata, por los motivos expuestos, en consecuencia modifica el ordinal cuarto de la parte dispositiva de la sentencia recurrida a fin de que disponga y se lea como sigue: 'Cuarto: Ratifica la constitución en actor civil formulada por Gilberto García Álvarez y Ana Karina Rodríguez Cabrera', en calidad de padres del menor fallecido, en cuanto a la forma y en cuanto al fondo; en consecuencia, se condena al señor Omar David Sánchez Pichardo, por su hecho personal en calidad de conductor, y a la entidad Pablo T. Brugal S.R.L., en su calidad de tercero civilmente responsable al pago de una indemnización ascendente a la suma de un millón de pesos oro dominicanos (RD\$1,000,000.00), distribuidos de la manera siguiente: 1) Quinientos mil pesos dominicanos (RD\$500,000.00), a favor de Gilberto García Álvarez; y 2) Quinientos mil pesos dominicanos (RD\$500,000.00), a favor de Ana Karina Rodríguez Cabrera; más el 1% de interés

mensual como indemnización suplementaria sobre el monto total de la indemnización, a partir de la fecha de la demanda en justicia, como justa reparación por los daños físicos, morales y materiales recibidos a causa del accidente; Tercero: Ratifica en sus demás aspectos la sentencia recurrida, cuya parte dispositiva consta escrita en el cuerpo de la presente sentencia; Cuarto: Condena al imputado Omar David Sánchez Pichardo, al pago de las costas Penales del proceso; Quinto: Condena al imputado Omar David Sánchez Pichardo, al tercero civil demandado Pablo T. Brugal S. R. L. y a Mapfre BHD Seguros, al pago de las costas civiles del procedimiento ordenando distracción a favor y provecho de los Lcdos. Mariano de Jesús Castillo Bello, Carmen Francisco Ventura y Omar de Jesús Castillo Francisco, abogados que afirman haberlas avanzado en su totalidad.

- 1.2. El Juzgado de Paz del municipio de Luperón, provincia Puerto Plata, mediante la sentencia núm. 279-2018-SS-00010, dictada el 22 de febrero de 2017, declaró al imputado Omar David Sánchez Pichardo culpable de violar los artículos 49 numeral 1, 61 literales a y b, 65 y 102 de la Ley núm. 241, sobre Tránsito de Vehículos de Motor, modificada por la Ley núm. 114-99, en perjuicio del menor Gilberto Junior García Rodríguez, y, en consecuencia, lo condenó a dos (2) años de prisión correccional y al pago de una multa de Un Millón Seiscientos Sesenta y Siete Pesos (RD\$1,667.00), así como al pago de las costas penales del proceso; en el aspecto civil, fue condenado por su hecho personal en calidad de conductor, conjuntamente con la entidad Pablo T. Brugal, S. R. L., en su calidad de tercero civilmente responsable, al pago de una indemnización ascendente a la suma de Un Millón de Pesos Dominicanos (RD\$1,000,000.00), más el 1% como suma complementaria a partir de la emisión de la sentencia condenatoria.
- 1.3. Mediante la resolución núm. 3328-2019, emitida por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia el 19 de agosto de 2019, fueron declarados admisibles en cuanto a la forma los referidos recursos, y fijó audiencia para el 22 de octubre de 2019 a los fines de conocer los méritos de los mismos; audiencia esta donde las partes procedieron a exponer sus conclusiones, siendo diferido el fallo para ser pronunciado dentro del plazo de los treinta (30) días establecidos por el Código Procesal Penal, produciéndose la lectura el día indicado en el encabezado de esta sentencia por razones atendibles.

La presente sentencia fue votada en primer término por el magistrado Francisco Antonio Jerez Mena, a cuyo voto se adhirieron las magistradas María G. Garabito Ramírez y Vanessa E. Acosta Peralta;

II. Medios en los que se fundamenta el recurso de casación.

- 2.1. La recurrente, la razón social Pablo T. Brugal, S. R. L., propone en su recurso de casación los medios siguientes:

Primer Medio: Falta de estatuir respecto del primer segundo medio planteado en el recurso de apelación; **Segundo Medio:** Falta, contradicción e ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia; **Tercer Medio:** Sentencia contraria al criterio de la Suprema Corte de Justicia; violación al principio de legalidad y a los derechos de defensa, al recurso y a la igualdad.

- 2.2. En el desarrollo de su primer medio el recurrente alega, en síntesis, que:

En el caso de la especie, se sostuvo en el escrito contentivo de recurso de apelación que el juez a quo incurrió en inobservancia del citado texto, toda vez que Pablo T. Brugal, S. R. L., fue puesta en causa y condenada como tercero civilmente responsable, en la acción civil accesoria a la penal interpuesta por Gilberto García Álvarez y Ana Carina Rodríguez Cabrera, sin tener dicha empresa, al momento del accidente la guarda del vehículo, ni ser el titular de la póliza de seguro del mismo, por lo que semejante constitución y pretensiones civiles deben ser declaradas inadmisibles; No obstante lo sostenido en el segundo motivo de apelación, la Corte a qua no da respuesta al mismo, por lo que debe esta Suprema Corte de Justicia casar la sentencia impugnada.

- 2.3. En el desarrollo de su segundo medio el recurrente alega, en síntesis, que:
- [...] la Corte a qua comete el mismo yerro del juez a quo al acoger los motivos dados por este último y, por ende, no dar motivos suficientes ni razonables (fundamentación analítica) para descartar las pruebas que demuestran que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) entidad que funge como registro en materia de Vehículos de Motor, antes del accidente, autorizó la emisión de una placa de exhibición a nombre de Cecilio Silverio Silverio, quien le compró el vehículo conducido por el imputado a Pablo T. Brugal, S. R. L.; específicamente, la juez a quo tuvo a mano la “constancia expedida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) respecto a la emisión de placa de exhibición No. X254311”, es decir un documento emitido por el registro público de la propiedad de vehículos de Motor, que es la DGII.*
- 2.4. En el desarrollo de su tercer medio el recurrente alega, en síntesis, que:
- Por último, resulta contraria a los derechos a la defensa, al recurso y a la igualdad la sentencia dictada por la Corte a qua en cuanto establece una condenación complementaria de un uno por ciento (1%) de interés mensual, a partir de la sentencia. Imponer intereses que se computen en el tiempo en que estén vigentes los plazos para recurrir, mientras se conozcan los recursos ordinarios y extraordinarios e incluso más allá de la emisión de la decisión, deviene en una falta de base legal (violación al principio de legalidad) y en una limitante el derecho a la defensa y a recurrir. Resulta irracional que el recurrente deba pagar por el perjuicio que provoque el tiempo en que se extienda su acción o sus recursos, más cuando la dilación que pueda sufrir el caso sea atribuible a acciones o recursos también interpuestos por la parte accionante y al propio sistema de justicia penal. De hecho, ha sido criterio constante de esta sala casar decisiones que contienen indemnizaciones complementarias por entender que las mismas carecen de sustento legal, ya que “el artículo 90 del Código Monetario y Financiero, derogó todas las disposiciones legales o reglamentarias en cuanto se opongan a lo dispuesto en dicha ley, razón por la cual [...] no se puede aplicar intereses a título de indemnización supletoria al haber desaparecido el interés legal, siendo sustituido por el interés convencional de las partes, y resulta inconcebible que dos adversarios, como los que existen en una litis judicial, en que entra en juego una posible indemnización, acuerden el interés a pagar por la parte sucumbiente [...]” (SCJ, 2da. Sala, 23 de julio de 2012. B.J. 1220. Ramón Esteban Paredes vs. José Luis de la Cruz Santos).*
- 2.5. Los recurrentes Gilberto García Álvarez y Ana Rodríguez Cabrera proponen en su recurso el medio de casación siguiente:
- “Primer (único) medio:** *Sentencia manifiestamente infundada, artículo 426, numeral 3, del Código Procesal Penal.*
- 2.6. En el desarrollo de su único medio los recurrentes alegan, en síntesis, que:
- En el caso de la especie la juez a quo no valoró en su justa dimensión las lesiones que produjeron la muerte al menor de menos de siete (7) años de edad Gilberto Junior García Rodríguez, hijo de los señores Gilberto García Álvarez y Ana Karina Rodríguez Cabrera no hubo una proporcionalidad con los golpes recibidos y la indemnización otorgada.
- 2.7. Los recurrentes, Omar David Sánchez Pichardo, Pablo T. Brugal, S. R. L. y la razón social Seguros MAPFRE BHD proponen en su recurso de casación el medio siguiente:
- Único medio: *Sentencia manifiestamente infundada, artículo 426, numeral 3, del Código Procesal Penal.*
- 2.6. En el desarrollo de su único medio los recurrentes alegan, en síntesis, que:
- Tal como señalamos en nuestro recurso de apelación, es menester examinar la sentencia atacada mediante el presente recurso de casación, en vista de que no consta en ella ningún tipo de motivación referente a las razones para desestimar los medios invocados; respecto al primer motivo propuesto en nuestro recurso de apelación, denunciemos que en el proceso conocido en contra de Omar David Sánchez de haber violado los artículo 49 literal 1, 61 literal A

y B, 65 y 102 de la Ley 241 modificado por la Ley 114-99 Sobre Tránsito de Vehículos de Motor, sin que se presentaran suficientes pruebas que determinaran la responsabilidad del imputado, toda vez que las declaraciones del testigo, Michael Díaz Villamán, no dieron al traste con la acusación presentada por el Ministerio Público, indicó de manera precisa que el accidente sucede momento en que el niño sale a buscar una pelota, que el niño vino de vacaciones con su padre, y su madre vive en Santiago, de estas declaraciones se colige que el menor de edad salió de manera sorpresiva e intempestiva a la vía, sin darle tiempo al imputado de maniobrar el vehículo y poder evitar el impacto, a pesar de que tomó todas las precauciones, de ahí que decimos que el accidente ocurre debido a la falta exclusiva del menor de edad, en este caso el señor Ornar David Sánchez no visualizó que hubiese un menor en el momento en que transitaba en la vía pues fue algo que sucedió de repente, en ese sentido debió dictarse sentencia absolutoria a favor del imputado, debió ser rechazada la acusación del Ministerio Público por no haberse probado lo pretendido con ella, toda vez que los elementos probatorios ofertados no acreditaron falta alguna por parte de nuestro representado, a estos planteamientos, tanto el a quo como la Corte, los pasaron por alto sin ofrecernos respuesta alguna de manera motivada respecto a las razones ponderadas para desestimar nuestros medios, en el sentido de que prácticamente confirmaron la sentencia en todas sus partes sin detenerse a evaluar en base a las comprobaciones de hechos ya fijadas, que ciertamente en el caso de la especie nuestro representado no cometió falta alguna; la Corte a qua lo que hizo fue desestimar nuestros medios sin ofrecernos una respuesta motivada, basta con examinar la decisión para constatar que prácticamente lo que hicieron los jueces a-qua fue corroborar el criterio del a quo, fijando la misma posición sin referirse de manera detallada, de forma los recurrentes nos quedamos sin una respuesta motivada respecto a los vicios denunciados, desestimando de manera genérica una serie de planteamientos que habíamos desarrollado en nuestro recurso, de modo que deja su sentencia carente de motivos y base legal, cuando debieron ponderar que no se acreditó que Omar David Sánchez fuese el responsable del accidente, y en el hipotético caso de que hubiese sido así, tampoco se valoró de manera correcta la actuación de la víctima como causa contribuyente, partiendo de que se trata de un accidente de tránsito, en el que se vieron envueltas dos partes, correspondía motivar y detallar el grado de participación a cargo de cada una de ellas, para así llegar a una conclusión en base a equidad y proporcionalidad; de este modo la Corte no sólo dejó su sentencia carente de motivos sino que la misma resulta carente de base legal, razón por la cual debe ser anulada, toda vez que la Corte a qua, al momento de analizar y decidir se limitó a rechazar los medios, sin explicar de manera detallada la Corte, el sostén jurídico en que se apoyó para confirmar la indemnización impuesta mediante la sentencia recurrida por lo que no entendemos el fundamento legal que tuvo para proceder de esa forma, la cual no se ajusta al grado de responsabilidad ni a cómo sucedió el accidente, es por esta razón que consideramos dicha suma desproporcionada y sin ningún soporte legal probatorio.

III. Motivaciones de la Corte de Apelación.

- 3.1. En lo relativo a los medios planteados por los recurrentes la Corte de Apelación, para fallar en la forma en que lo hizo, reflexionó en el sentido de que:

[...] motivos que comparte esta Corte, además de conformidad a lo dispuesto por los artículos 18 y 19 de la Ley 241 sobre Tránsito vigente al momento del accidente, así como el texto del Artículo 5 de la Ley 492-08, del 19 de diciembre de 2008, que establece el nuevo procedimiento para la transferencia del vehículo de motor, vigente al momento del accidente: “Toda persona, sea física o moral, que haya denunciado la transferencia de un vehículo de motor, cuyo certificado de propiedad haya sido expedido a su nombre, podrá hacerse expedir certificación en la que haga constar la transferencia, la cual podrá ser utilizada como medio legítimo de prueba sobre la propiedad y guarda del vehículo, para sustraerse de la responsabilidad civil y

penal ante cualquier reclamación por los daños y perjuicios ocasionados por el vehículo por él transferido”; por consiguiente el tercero civil demandado no había denunciado la transferencia del vehículo accidentado ante la Dirección General de Impuestos internos para el día del accidente 2 de agosto de 2016, tal como se comprueba de las certificaciones expedidas por dicho órgano estatal valoradas por el Juez a quo, por tanto debe rechazar el medio promovido por el recurrente, por improcedente y carente de fundamento o base legal; en ese sentido ha sido juzgado por la Suprema Corte de Justicia que los jueces son soberanos al momento de imponer la indemnización siempre que la misma no sea desproporcional SCJ Sentencia de fecha 6 de febrero del 2008. Pág. 221; por lo que procede ratificar el monto de indemnización fijado por la jueza a qua en el caso juzgado; en cuanto al aspecto referente a la fecha del inicio de pago de la indemnización suplementaria en el sentido de que debió ser impuesta a partir de la demanda no de la sentencia dictada, procede acoger parcialmente las pretensiones de la parte recurrente señores Gilberto García Álvarez y Ana Karina Rodríguez Cabrera, en virtud de lo establecido en el artículo 1153 del Código Civil, cuyo texto al reglamentar la indemnización suplementaria dice: “...Deben abonarse estos daños y perjuicios, sin que el acreedor esté obligado a justificar pérdida alguna. No se deben, sino desde el día de la demanda, excepto en los casos en que la ley las determina de pleno derecho”; en cuanto al monto del 1% la Corte estima razonable dicho porcentaje tomando en cuenta que su finalidad es evitar la depreciación del crédito de los actores civiles; por lo que esta Corte obrando por propia autoridad y contrario imperio debe modificar el ordinal cuarto de la parte dispositiva de la sentencia recurrida en lo referente a la indemnización suplementaria a fin de que disponga; sobre este primer aspecto de recurso, la jueza a qua luego de valorar las pruebas estableció en el motivo 16 lo siguiente: “De la valoración conglobada de los medios de pruebas presentados, el tribunal tiene a bien sentar el siguiente criterio que quedó demostrada más allá de todas duda razonable que el imputado fue que cometió la falta generadora del accidente, en razón de que este es quien impacta a la víctima cuando este estaba en la orilla de la carretera, el cual transitaba en su vehículo a una velocidad no prudente sin percatarse de la presencia del mismo por lo que lo impacta sin darle oportunidad de defenderse más aún porque este no condujo su vehículo de manera tal, que pudiera prevenir cualquier situación imprevista, porque el mismo no tomó medidas de precaución que el buen Juicio y la prudencia aconsejan, como ocurrió en el caso de la especie que lo impactó; puesto que si hubiera obrado con prudencia el accidente pudo haberse evitado, también porque debido a la forma descuidada en que conducía no pudo maniobrar su vehículo a tiempo lo que le impidió mantener el control y evitar la colisión [...]; asimismo, la jueza a qua no otorgó crédito a los testimonios a descargo presentados por la defensa del imputado y de Mapfre BHD seguros, fundamentado en las comprobaciones hechas por dicha Jueza al valorar los mismos en el motivo 14 de la sentencia en que consta [...]; asimismo en el motivo 13 de la sentencia valoró de manera positiva los testimonios de los señores Gerdy María Polanco Minaya y Michael Díaz Villaman, quienes al momento del accidente se encontraban en el lugar y pudieron ver cómo sucedió narrando las circunstancias de tiempo y forma en que ocurrió, de cómo quedó el niño luego de ser impactado por el vehículo conducido por Omar David Sánchez, que el accidente ocurre en una recta; por lo que la jueza a qua estableció los hechos a partir de la valoración de las pruebas determinando que el accidente se produjo por la velocidad que conducía el imputado la camioneta blanca, la cual no le permitió maniobrar reducir y detenerse ante la presencia del niño en la vía, localizada en la recta en la carretera Imbert Luperón siendo un lugar poblado donde existe una banca de lotería, por lo que al establecer la falta a cargo del conductor la jueza a qua hizo a juicio de esta Corte una correcta valoración de las pruebas sometidas en el juicio de fondo, por lo que no se demostró los vicios propuestos en el primer medio de recurso, procediendo su rechazo; por consiguiente la sentencia contiene motivos precisos y suficientes que fundamentan el monto de

la indemnización impuesta por lo que el medio propuesto por los recurrentes debe ser rechazado; en cuanto al tercer motivo de recurso propuesto por Ornar David Sánchez, pablo T. Brugal SRL y Mapire BHD Seguros, referente a la falta de motivación respecto a la ponderación de la conducta de la víctima, argumentando en síntesis [...]; Dicho medio debe ser rechazado pues en el motivo 16 la jueza a qua estableció que el accidente se debió a la falta del conductor de la camioneta Nissan Frontier pues no acreditó la versión narrada por los testigos a descargo según se establece en el motivo 20 de la presente sentencia, dando por consiguiente la jueza a qua motivos razonables suficientes para establecer la responsabilidad penal del imputado en la ocurrencia del accidente.

IV. Consideraciones de la Segunda Sala. Exposición sumaria. Puntos de derecho.

En cuanto al recurso de casación interpuesto por Pablo T. Brugal, S. R. L.:

- 4.1. En el primer medio formulado el recurrente arguye que la Corte *a quem* no ofrece respuestas a lo invocado en su recurso de apelación, respecto a la vulneración de las disposiciones del artículo 118 del Código Procesal Penal, en el sentido de que fue puesta en causa y condenada como tercera civilmente responsable en la acción civil accesoria a la penal, sin tener dicha empresa al momento del accidente la guarda del vehículo, ni ser la titular de la póliza de seguro del mismo.
- 4.2. En el caso, luego de la lectura detenida del fallo impugnado, se visualiza que si bien la parte recurrente arguye la Corte no da respuesta a su planteamiento respecto a la determinación de la responsabilidad civil, muy por el contrario en la página 30 de su decisión la alzada se pronunció respecto a dicho alegato, al verificar que si bien dicha parte en el ejercicio de su derecho de defensa presentó varias pruebas para refutar la acusación en su contra, la prueba idónea para determinar la responsabilidad civil en materia de tránsito lo es la certificación de la DGII, y en este caso, tal como lo estableció la alzada, la misma probó que al momento del accidente el vehículo envuelto en el mismo estaba a nombre de la razón social Pablo T. Brugal, S.R.L.; de ahí que su responsabilidad civil quedó comprometida; por lo que esta Sala verifica que sus alegatos respecto a ese punto ya fueron respondidos por la alzada de manera suficiente; por tanto, el motivo que se analiza carece de fundamento y debe ser desestimado.
- 4.3. Continúa el recurrente manifestando inconformidad con la decisión impugnada, en esta ocasión respecto a la motivación ofrecida, porque alegadamente la alzada se limita a establecer que comparte los motivos plasmados por la jurisdicción de juicio en su sentencia, sin ofrecer una fundamentación analítica para descartar las pruebas aportadas para demostrar que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) autorizó la emisión de una plaza de exhibición a nombre de Cecilio Silverio Silverio, quien le compró el vehículo a Pablo T. Brugal, S. R. L., con lo que estima es más que suficiente para establecer el traslado de la guarda del vehículo.
- 4.4. Sobre este particular, la alzada razonó en la forma siguiente:
[...] Motivos que comparte esta Corte, además de conformidad a lo dispuesto por los artículos 18 y 19 de la Ley 241 sobre tránsito vigente al momento del accidente, así como el texto del Artículo 5 de la Ley 492-08, del 19 de diciembre de 2008, que establece el nuevo procedimiento para la transferencia del vehículo de motor, vigente al momento del accidente: “Toda persona, sea física o moral, que haya denunciado la transferencia de un vehículo de motor, cuyo certificado de propiedad haya sido expedido a su nombre, podrá hacerse expedir certificación en la que haga constar la transferencia, la cual podrá ser utilizada como medio legítimo de prueba sobre la propiedad y guarda del vehículo, para sustraerse de la responsabilidad civil y penal ante cualquier reclamación por los daños y perjuicios ocasionados por el vehículo por él transferido”; por consiguiente el tercero civil demandado no había denunciado la transferencia

del vehículo accidentado ante la Dirección General de Impuestos internos para el día del accidente 2 de agosto de 2016, tal como se comprueba de las certificaciones expedidas por dicho órgano estatal valoradas por el Juez a quo, por tanto debe rechazar el medio promovido por el recurrente, por improcedente y carente de fundamento o base legal.

- 4.5. Razonamientos que esta Sala verifica satisfacen palmariamente los requerimientos de una debida motivación, máxime cuando en la especie existe una certificación de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) que probó en la jurisdicción de juicio que al momento del accidente el vehículo conducido por el ciudadano Omar David Sánchez figuraba a nombre de la entidad Pablo T. Brugal S. R. L., lo cual, como ya vimos, es la prueba idónea para establecer la responsabilidad civil de un tercero que no estuvo presente en el accidente pero que legalmente es el propietario del vehículo involucrado en el hecho; razonamiento que fue robustecido por la Corte con motivación suficiente en su página 30 de su sentencia, tal como fue transcrito en el párrafo anterior.
- 4.6. Esta Sala luego de examinar la decisión impugnada, ha podido advertir la inexistencia del vicio invocado por el recurrente, en tanto que, y conforme al contenido de la sentencia de marras, se verifica que los jueces de la Corte *a qua* emitieron una decisión debidamente fundamentada, en el sentido de dar respuesta a lo denunciado por el recurrente en aquel escenario procesal, quienes, luego de abreviar en todo el contenido de la sentencia de primer grado, expusieron su parecer sobre la actuación de los juzgadores de juicio, especialmente en su labor de valoración de las pruebas que les fueron presentadas, para así concluir con la confirmación de la decisión por ellos adoptada, al otorgar valor probatorio a todas las pruebas, pero muy en especial a la indicada certificación, pues con esta se pudo establecer, en palabras de la corte *a qua*, que su responsabilidad civil quedó comprometida; en esas circunstancias, es evidente que los alegatos del recurrente carecen de fundamento, por lo que deben ser desestimados.
- 4.7. Por último, alega el recurrente que la decisión impugnada es contraria a un criterio de esta Sala de la Suprema Corte de Justicia respecto a las indemnizaciones complementarias, invocando así la vulneración al derecho de defensa, al recurso y a la igualdad, en el sentido de que la Corte estableció una condenación complementaria de un 1% de interés mensual a partir de la emisión de la sentencia.
- 4.8. En esa línea, y en cuanto al aspecto de la sentencia que modificó el ordinal cuarto de la decisión condenatoria y estableció el pago del 1% a partir de la fecha de la querella a título de indemnización compensatoria, la Corte *a qua* estableció que:

En cuanto al aspecto referente a la fecha del inicio de pago de la indemnización suplementaria en el sentido de que debió ser impuesta a partir de la demanda no de la sentencia dictada, procede acoger parcialmente las pretensiones de la parte recurrente señores Gilberto García Álvarez y Ana Karina Rodríguez Cabrera, en virtud de lo establecido en el artículo 1153 del Código Civil, cuyo texto al reglamentar la indemnización suplementaria dice: "...Deben abonarse estos daños y perjuicios, sin que el acreedor esté obligado a justificar pérdida alguna. No se deben, sino desde el día de la demanda, excepto en los casos en que la ley las determina de pleno derecho"; en cuanto al monto del 1% la Corte estima razonable dicho porcentaje tomando en cuenta que su finalidad es evitar la depreciación del crédito de los actores civiles; por lo que esta Corte obrando por propia autoridad y contrario imperio debe modificar el ordinal cuarto de la parte dispositiva de la sentencia recurrida en lo referente a la indemnización suplementaria a fin de que disponga que el 1% mensual sobre el monto de la indemnización debe ser calculado a partir de la fecha de la querella y constitución en actor civil interpuesta por los señores Gilberto García Álvarez y Ana Karina Rodríguez Cabrera.
- 4.9. Es en ese sentido que, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha juzgado y establecido, como Corte de Casación, de manera reiterada, lo siguiente: "1. Si bien es cierto los artículos 90

y 91 del Código Monetario y Financiero derogaron todas las disposiciones de la Orden Ejecutiva núm. 312 del 1 de junio de 1919 sobre Interés Legal, así como todas las disposiciones contrarias a dicho código; y que además la Orden Ejecutiva núm. 312, que fijaba el interés legal en 1% mensual, tasa a la cual también limitaba el interés convencional sancionando el delito de usura; no menos cierto es que, en modo alguno dicha disposición legal regulaba la facultad que la jurisprudencia había reconocido previamente a los jueces para establecer intereses compensatorios al decidir; lo cual, el vigente Código Monetario y Financiero tampoco contiene disposición alguna al respecto; 2. Conforme al principio de reparación integral que rige la materia de responsabilidad civil, el responsable de un daño está obligado a indemnizar a la víctima la totalidad del perjuicio existente al momento de producirse el fallo definitivo sin importar que dicho daño haya sido inferior a la hora del hecho lesivo o a la de incoarse la acción en su contra; 3. El interés compensatorio establecido por los jueces del fondo constituye una aplicación del principio de reparación integral, ya que se trata de un mecanismo de indexación o corrección monetaria del importe de la indemnización que persigue su adecuación al valor de la moneda al momento de su pago; que existen diversos medios aceptados generalmente para realizar la referida corrección monetaria del daño, a saber, la indexación tomando como referencia el precio del oro, el precio del dólar u otras monedas estables, el índice del precio al consumidor, la tasa de interés y el valor de reemplazo de los bienes afectados; 4. La condenación al pago de un interés sobre el valor de los daños, además de constituir el método de corrección monetaria más frecuentemente utilizado en el ámbito judicial, es la modalidad más práctica de indexar la indemnización acordada, ya que una vez liquidado el valor original del daño, el juez sólo tiene que añadirle los intereses activos imperantes en el mercado; siempre que dichos intereses no excedan el promedio de las tasas de interés activas imperantes en el mercado al momento de su fallo.

- 4.10. En base al criterio anteriormente señalado, las Salas Reunidas de la Suprema Corte de Justicia, mediante sentencia de fecha 10 de junio de 2015, estableció lo siguiente: “Considerando, que en base al criterio anteriormente señalado, a la luz del artículo 2 de la Ley sobre Procedimiento de Casación, relativo a la unidad jurisprudencial, con el fin de obtener una justicia predecible, cualidad que ha sido reconocida por la doctrina como una garantía de dos de los principios fundamentales de nuestro sistema judicial, a saber, la igualdad de todos ante la ley y la seguridad jurídica; estas Salas Reunidas hacen propio el precitado razonamiento; de cuya aplicación al caso resulta que: La sentencia de la Corte a qua confirmó el pago de un 5% de utilidad mensual en base a la suma total de los valores indicados como indemnización suplementaria, lo que equivale a un 60% anual; esta tasa es superior a las tasas de interés activas imperantes en el mercado financiero para la época, según los reportes publicados oficialmente por el Banco Central de la República Dominicana, que eran inferior en todos los ámbitos el 20% por ciento anual; Considerando, que por las razones expuestas precedentemente, estas Salas Reunidas consideran que la Corte a qua incurrió en una errada aplicación de su soberanía, y por lo tanto incorrecta aplicación del derecho, por lo que en este aspecto, y en aplicación del artículo 427.2 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley núm. 10-15, del 10 de febrero de 2015, proceden a casar la decisión impugnada y dictar directamente la sentencia del caso, específicamente en lo concerniente al interés judicial, reduciendo el mismo de un 5% a 1.5% mensual, como indemnización suplementaria”.
- 4.11. El artículo 2 de la Ley núm. 3726, sobre Procedimiento de Casación, establece lo siguiente: “Las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, en funciones de Corte de Casación, establecen y mantienen la unidad de la jurisprudencia nacional”.
- 4.12. La jurisprudencia en su labor orientadora sirven de guía para casos análogos sean resuelto en el mismo sentido, de acuerdo al precedente o línea jurisprudencial adoptado; por lo que, en la especie, esta Segunda Sala procede a adoptar este criterio, y hace propio el razonamiento

acogido por las Salas Reunidas [caso: Exp. 2015-1076. José Alexander Brito Rojas y compartes], el cual comparte esta sala porque se ajusta a la cuestión que aquí se analiza; por lo cual procede desestimar lo argüido por los recurrentes, en el sentido de que “lo decidido por la Corte *a qua*, entra en contradicción con la normativa, en vista de que el interés legal fue derogado por el Código Monetario y Financiero”, toda vez que este criterio fue variado por la indicada decisión.

**En cuanto al recurso de casación interpuesto por
Gilberto García Álvarez y Ana Karina Rodríguez:**

- 4.13. Los recurrentes discrepan con la decisión impugnada, porque según su parecer, la indemnización acordada no es proporcional al daño recibido, dado que su hijo, el menor Gilberto Junior García Rodríguez, recibió golpes y heridas que le produjeron la muerte.
- 4.14. En lo referente al recurso de casación interpuesto por los querellantes y actores civiles, señores Gilberto García Álvarez y Ana Karina Rodríguez, estos plantean que no existe proporcionalidad al momento de imponer la sanción civil, ya que, pese a que su acción fue admitida, la suma de la condena es mínima.
- 4.15. En ese orden, ha sido juzgado que los jueces de fondo, para determinar la magnitud de los daños y perjuicios sufridos, gozan de un poder soberano de apreciación, lo que escapa al control de la casación ejercido por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, siempre y cuando estas no sean excesivas ni resulten irrazonables, sino que se encuentren plenamente justificadas, acordes con las circunstancias de los hechos, con el grado de las faltas cometidas por las partes y con la magnitud del daño causado, advirtiéndose esta alza que la indemnización acordada por el tribunal de primer grado y confirmada por la corte *a qua* se encuentra debidamente fundada, consignándose en la decisión recurrida lo siguiente:
- Sobre el punto controvertido el Juez a quo estatuyó en el motivo 27 lo siguiente: “Que los señores Gilberto García Álvarez y Ana Karina Rodríguez Cabrera, a través de sus abogados constituidos y apoderados especiales, han solicitado un monto total de: cinco millones de pesos con 00/100 (RD\$5,000,000.00) para cada uno de los actores civiles, y la suma de Cincuenta y tres mil ciento sesenta y siete pesos con 00/100 (RD\$53,167.00), en favor y provecho del señor Gilberto García Álvarez por los gastos realizados a raíz de la muerte de su hijo; para una suma total de Diez Millones Cincuenta y Tres Mil Ciento Sesenta y Siete Pesos con 00/100 (RD\$10,053,167.00), suma esta que el tribunal la considera muy excesiva, ya que si bien se trata de golpes y heridas que produjeron la muerte, además de los daños morales, lo cual no tiene precio; entiende el tribunal que es necesario fijar un monto y que éste no debe ser arbitrario, desproporcional, ni apartarse de la prudencia, por lo que el tribunal estima razonable la imposición de la indemnización detallada anteriormente”. En ese sentido ha sido juzgado por la Suprema Corte de Justicia que los jueces son soberanos al momento de imponer la indemnización siempre que la misma no sea desproporcional SCJ Sentencia de fecha 6 de febrero del 2008. Pág. 221; por lo que procede ratificar el monto de indemnización fijado por la jueza a qua en el caso juzgado.
- 4.16. En virtud de lo antes expuesto, y en vista de que la sentencia impugnada se encuentra debidamente justificada, se desestima el argumento examinado.

**En cuanto al recurso de casación interpuesto por Omar David Sánchez Pichardo, Pablo
T. Brugal, S. R. L., y seguros MAPFRE BHD:**

- 4.17. Como se ha visto, los recurrentes, en esencia, denuncian que la Corte *a qua* ha dado una respuesta aislada mediante la utilización de argumentaciones injustificadas que no satisfacen sus planteamientos.

4.18. Sobre este particular, la alzada razonó en la forma siguiente:

Asimismo en el motivo 13 de la sentencia valoró de manera positiva los testimonios de los señores Gerdy María Polanco Minaya y Michael Díaz Villamán, quienes al momento del accidente se encontraban en el lugar y pudieron ver cómo sucedió narrando las circunstancias de tiempo y forma en que ocurrió, de cómo quedó el niño luego de ser impactado por el vehículo conducido por Omar David Sánchez, que el accidente ocurre en una recta; por lo que la Jueza a qua estableció los hechos a partir de la valoración de las pruebas determinando que el accidente se produjo por la velocidad que conducía el imputado la camioneta blanca, la cual no le permitió maniobrar reducir y detenerse ante la presencia del niño en la vía, localizada en la recta en la carretera Imbert Luperón siendo un lugar poblado donde existe una banca de lotería, por lo que al establecer la falta a cargo del conductor la jueza a qua hizo a juicio de esta Corte una correcta valoración de las pruebas sometidas en el juicio de fondo, por lo que no se demostró los vicios propuestos en el primer medio de recurso, procediendo su rechazo.

4.19. En ese contexto es preciso destacar que, al abreviar en la sentencia recurrida, se pone de manifiesto que la Corte *a qua* desestimó dichos planteamientos al determinar que el tribunal de juicio fundó su decisión luego de la valoración a los elementos probatorios aportados por la parte acusadora, especialmente los testimonios de los señores Gerdy María Polanco Minaya y Michael Díaz Villamán, quienes estuvieron presentes en el lugar de los hechos justo en el momento en que el menor Gilberto Junior García Rodríguez fue impactado por la camioneta conducida por Omar David Sánchez Pichardo, dando fe de que fue inevitable el impacto debido a la alta velocidad a la que transitaba el referido conductor, la cual no le permitió maniobrar, reducir y detenerse ante la presencia del niño en la vía; que, además, es preciso indicar que respecto al alegato de falta de motivación sobre la imposición de la indemnización, dicho planteamiento fue examinado por la alzada, quien, luego de hacer un análisis de dicho acto jurisdiccional, determinó lo improcedente del planteamiento, dado que el tribunal de juicio motivó de forma precisa y suficiente las razones por las cuales la indemnización acordada es condigna, al determinarse el vínculo de causalidad entre la falta y el daño sufrido por los actores civiles a consecuencia de la actuación imprudente de la parte imputada.

4.20. Por lo anteriormente transcrito, se aprecia que al momento de analizar los aspectos planteados en la impugnación, la alzada determinó que fueron ponderados minuciosamente cada uno de los elementos de prueba vertidos en el juicio según las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia, dándose cabal cumplimiento con ello a las previsiones normativas procesales penales; elementos estos que resultaron suficientes y determinantes para decretar la responsabilidad penal y civil de la parte responsable de las heridas que produjeron la muerte del menor impactado; que, en esas circunstancias, la presunción de inocencia que le amparaba quedó totalmente fulminada en el juicio, todo lo cual fue refrendado por la corte *a qua*; de modo que dicha Corte, ante la inexistencia comprobada del vicio denunciado por el recurrente, lo desestimó con motivos pertinentes y suficientes que soportan jurídicamente el fallo impugnado, cumpliendo con ello con la obligación de motivar que prevé el apartado 24 del Código Procesal Penal en y consonancia con el criterio jurisprudencial de esta Sede Casacional en lo relativo al concepto de motivación que se desarrolla más adelante; por lo que procede desestimar el medio de casación que se examina por carecer de toda apoyatura jurídica.

4.21. En efecto, es conveniente destacar que por motivación hay que entender aquella en la que el tribunal expresa de manera clara y ordenada las cuestiones de hecho y derecho que sirvieron de soporte a su sentencia, o en otros términos, en la que el juez o los jueces explican las razones jurídicamente válidas o idóneas para justificar su decisión, expuesta dicha argumentación de manera comprensible, por cuestiones que, además de jurídicas, sirvan de pedagogía social; en el caso, la sentencia impugnada, lejos de estar afectada de un déficit de

fundamentación, como erróneamente denuncia el recurrente, la misma está suficientemente motivada y cumple palmariamente con los patrones motivacionales que se derivan del artículo 24 del Código Procesal Penal.

- 4.22. En ese sentido, al no verificarse los vicios invocados en el medio que se analiza, procede rechazar los recursos de casación de que se trata y, en consecuencia, queda confirmada en todas sus partes la decisión impugnada, todo ello de conformidad con las disposiciones del numeral 1 del artículo 427 del Código Procesal Penal.

V. De las costas procesales.

- 5.1. Por disposición del artículo 246 del Código Procesal Penal, toda decisión que pone fin a la persecución penal, la archive, o resuelva alguna cuestión incidental, se pronuncia sobre las costas procesales, las que son impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal halle razón suficiente para eximirla total o parcialmente; que en el presente caso procede condenar a los recurrentes al pago de las costas por haber sucumbido en sus pretensiones.

VI. De la notificación al Juez de la Ejecución de la Pena.

- 6.1. Los artículos 437 y 438 del Código Procesal Penal, modificados por la Ley núm. 10-15; y la resolución marcada con el núm. 296-2005 del 6 de abril de 2005, contentiva del Reglamento del Juez de la Ejecución de la Pena para el Código Procesal Penal, emitida por esta Suprema Corte de Justicia, mandan a que copia de la presente decisión debe ser remitida, por la secretaría de esta Alzada, al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial correspondiente, para los fines de ley.

VII. Dispositivo.

Por los motivos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia,

FALLA:

Primero: Rechaza los recursos de casación interpuestos por: a) Omar David Sánchez Pichardo, Pablo T. Brugal, S. R. L. y Seguros Maphre; b) Pablo T. Brugal, S. R. L.; y c) Gilberto García Álvarez y Ana Karina Rodríguez, contra la sentencia núm. 627-2018-SEEN-00356, dictada por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Puerto Plata el 1 de noviembre de 2018, cuyo dispositivo aparece copiado en parte anterior del presente fallo.

Segundo: Condena a los recurrentes al pago de las costas.

Tercero: Ordena al secretario general de esta Suprema Corte de Justicia notificar la presente decisión a las partes y al Juez de la Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Puerto Plata, para los fines correspondientes.

Firmado: Francisco Antonio Jerez Mena, María G. Garabito Ramírez y Vanessa E. Acosta Peralta. Cesar José García Lucas, Secretario General.

La presente sentencia ha sido dada y firmada por los señores Jueces que figuran en su encabezamiento, en la audiencia pública del día, mes y año en él expresados, y fue firmada, leída y publicada por mí, Secretaria General, que certifico.

www.poderjudici